

Santiago, catorce de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que en este procedimiento sumario especial de acción reivindicatoria del Decreto Ley N° 2695 de 1979, seguido ante el Juzgado de Letras de Constitución, bajo el Rol C-218-2019, caratulado “Forestal Mininco S.A. con Letelier”, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de casación en el fondo, deducido por la parte demandada contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, de dos de agosto de dos mil veinticuatro, que confirmó el fallo de primer grado, de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, que rechazó el incidente de abandono del procedimiento, sin costas; y la sentencia definitiva de primera instancia, de cinco de diciembre del mismo año, que acogió la acción reivindicatoria y, en consecuencia, ordenó a la demandada la restitución de un retazo de terreno de una superficie de 2,04 hectáreas, la cancelación de la inscripción de dominio que le ampara, y la devolución de los frutos naturales y/o civiles devengados con posterioridad a la contestación de la demanda, sin costas.

Segundo: Que, en relación a aquella parte de la sentencia recurrida que confirma la de primer grado que desestima el incidente de abandono del procedimiento, la recurrente de nulidad funda su arbitrio en la infracción de los artículos 152 y 687 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Tercero: Que, a su respecto, cabe precisar que el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, dispone que se admite el recurso de casación en el fondo contra sentencias definitivas inapelables, y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, dictadas -en lo que interesa para el presente caso- por Cortes de Apelaciones, siempre que se hayan pronunciado con infracción de ley, y esta infracción haya influido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia.

Cuarto: Que, sin embargo, la resolución impugnada en la especie a través del arbitrio de nulidad substancial no presenta las características de aquéllas aludidas en el motivo precedente, toda vez que no ha puesto fin a la instancia, ni tampoco ha concluido el juicio, ni ha hecho imposible su prosecución, razón por la cual el recurso de nulidad intentado sobre este acápite no puede ser admitido a tramitación.

Quinto: Que, por su parte, en lo que concierne a aquella parte del fallo de alzada que confirmó el de primer grado que acogió parcialmente la acción reivindicatoria, la impugnante de nulidad de fondo alega, en primer término, la infracción del artículo 22 inciso 3° del Decreto Ley N° 2695 de 1979, en relación con los artículos 160, 425 y 428 del Código de Procedimiento Civil.

En síntesis, explica que el error de derecho se produce porque el fallo recurrido analiza en conciencia la prueba rendida, cuando ello debió realizarse de



acuerdo a las reglas de la prueba tasada, y de la sana crítica en el caso del informe pericial rendido, dado que el procedimiento a que se sujeta la acción de marras debe ajustarse a las reglas del juicio sumario establecidas en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil, y no a aquéllas que rigen para la oposición a la regularización de la pequeña propiedad raíz.

Acto seguido, cuestiona que en dicho ejercicio de valoración probatoria se haya reconocido a la demandante la propiedad de un predio de 36 hectáreas de superficie, en circunstancias que la pericial rendida determinó que el terreno de ésta solo tiene una cabida de 16,14 hectáreas; probanza a la que luego sí se le otorga el valor de plena prueba para establecer la existencia de una “superposición” entre el terreno saneado por la demandada y el predio de la demandante, aunque sin concurrir antecedentes que lo justifiquen; unido a que tampoco los sentenciadores del fondo efectúan un análisis comparativo de la prueba documental allegada por su parte, con la aportada por la actora, especialmente en torno a que el predio cuyo dominio se atribuye a esta última, se encuentra amparado por un rol de avalúo fiscal que figura a nombre de la “Sucesión Barrera”, de la cual forman parte quienes le vendieron a la demandada el retazo de terreno que luego ésta regularizó.

A su turno, acusa la infracción de los artículos 686, 696 y 924 del Código Civil por no haberse aplicado al caso de marras. En tal sentido, refiere que de los antecedentes del proceso no consta que se haya acreditado en forma debida el dominio y posesión inscrita de la demandante sobre el predio que pretende le sea restituido, como tampoco que ésta haya perdido o haya sido despojada de la posesión material del retazo saneado por la demandada; precisando que al efecto solo se aportó por la actora al proceso una inscripción de dominio del año 2006 a nombre de una empresa forestal distinta de aquélla, no siendo suficientes al respecto las explicaciones dadas por la demandante en cuanto a que habría comprado el patrimonio o paquete accionario de aquella empresa forestal, dentro de cuyos activos se encontraba el aludido inmueble.

Finalmente, invoca la vulneración del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República porque con lo dicho se ha transgredido la garantía del debido proceso, desde que no se ha realizado un adecuado análisis y ponderación de todas las alegaciones y pruebas vertidas en la causa, que permita arribar a conclusiones racionales y justas, de acuerdo a la ley y conforme al mérito del proceso.

Solicita que se invalide la sentencia impugnada y se dicte sentencia de reemplazo que revoque el fallo definitivo de primera instancia que acogió la demanda de acción reivindicatoria y, en su lugar, rechace dicha pretensión de dominio, con costas.



Sexto: Que, dicho lo anterior, valga recordar que el artículo 772 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, sujeta el recurso de casación en el fondo a un requisito indispensable para su admisibilidad, como es que el escrito en que se interpone “exprese”, es decir, explicita en qué consiste o cómo se han producido el o los errores que se denuncian, y siempre que éstos sean “de derecho”. Además, atendido su carácter extraordinario, la interposición del recurso de invalidación se encuentra sujeta a formalidades, entre las cuales destaca la necesidad de expresar en el libelo recursivo de qué modo influyó substancialmente en lo decidido, el error que se reclama.

Así, la única posibilidad de éxito del recurso de nulidad se anida en la transgresión de las mencionadas leyes atinentes a la cuestión planteada, que por ello revisten aquí, el rango de *decisoria litis* y, al no criticar la recurrente la circunstancia de haberse aplicado inadecuada o defectuosamente tal preceptiva, implícitamente se reconoce y acepta su correcta aplicación en el fallo.

En consecuencia, lo precedente, obligaba a la recurrente a indicar la ley que denunciaba como vulnerada y que, en todo evento, hubiere tenido influencia substancial en lo resolutivo.

Séptimo: Que, en la especie, recayendo la controversia sobre la procedencia de la acción de dominio que tiene lugar a propósito de la regularización de la pequeña propiedad raíz, correspondía a la recurrente invocar en el recurso en estudio, al menos los artículos 26 y 27 del Decreto Ley N° 2695 de 1979, pues la primera de dichas disposiciones, es la que habilitó a la parte demandante para ejercer la acción de dominio en análisis, y concierne a la norma que contiene precisamente los presupuestos que la propia recurrente controvierte que concurren; mientras que el segundo precepto es el que regula los efectos que el acogimiento de la acción reivindicatoria deducida en el marco de la regularización de la pequeña propiedad raíz produce en los derechos de la recurrente sobre el inmueble; unido a que tampoco la recurrente invocó el estatuto común de la acción reivindicatoria previsto en los artículos 889 y siguientes del Código Civil.

En consecuencia, habiéndose omitido por la recurrente de autos alegar la infracción de la preceptiva sustantiva básica que detenta el carácter de *decisoria litis* en el caso *sub-judice*, inequívocamente, se genera un vacío que esta Corte no puede subsanar para el caso de acogerse el recurso y con ello de forma íntegra la pretensión de la demandada, dado el carácter de derecho estricto que éste reviste, razón por la que no puede ser admitido a tramitación.

En efecto, la formulación que efectúa la impugnante en su arbitrio de nulidad, resulta inconducente a los propósitos por ella anhelados, como quiera que, de asumirse mal aplicados los artículos referidos en el considerando quinto precedente,



ello carecería de influencia sustancial en lo resuelto al no haberse impugnado la aplicación de las normas *decisoria litis*.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 765, 767, 772 y 782 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado Raimundo Contreras Meza, en representación de la parte demandada, contra la sentencia de dos de agosto de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Talca.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase, vía interconexión.

Rol N° 40.804-2024



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Arturo Prado P., Mauricio Alonso Silva C., María Angélica Cecilia Repetto G., María Soledad Melo L. y Abogado Integrante Álvaro Rodrigo Vidal O. Santiago, catorce de octubre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a catorce de octubre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

